

“¿PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO?”:  
REPRESENTACIÓN, VIOLENCIA SIMBÓLICA Y MULTICULTURALISMO  
EN COLOMBIA

POR

NICK MORGAN  
*Universidad de Los Andes, Bogotá*

En agosto de 2004 estalló un verdadero escándalo social en Bogotá. No se trataba, sin embargo, de acusaciones de corrupción contra ministros, ni de la politiquería de un presidente mesiánico que quería asegurar su reelección. Ni siquiera tenía que ver con la connivencia que existe entre ciertos policías y el narcotráfico. Se trataba, ni más ni menos, de una mujer que les había enseñado a sus dos hijos a comer papel de periódico mezclado con panela para “alimentarse”. Esta noticia, que salió por primera vez en el noticiero de *CityTV*, el canal privado de la capital,<sup>1</sup> convirtió a Myriam Suárez, una “empleada” desempleada de 24 años, en una estrella fugaz. Aparentemente, la falta de trabajo –su esposo, conductor de buseta, también estaba en paro– le había impulsado a tomar esta medida tan desesperada. “Me tocó acostumbrarlos a comer papel porque un día no tuve qué más darles y me lloraban por algo de comer”, dijo Suárez, según el artículo de Juan Diego Alvira, periodista de *Citynoticias* que escribió una versión de la historia para *El Tiempo*.

La dieta inhumana de esta familia humilde provocó no tanto la ola de solidaridad sugerida por el artículo de Alvira, sino una insólita ola de indignación que se hizo sentir en el espacio televisivo *Arriba Bogotá* de *CityTV* y en el Foro del Lector de *El Tiempo*. Insólito no porque los colombianos sean indiferentes ante la miseria que experimentan tantos de sus compatriotas, sino porque el espectáculo cotidiano de este sufrimiento es tan común que sólo el descubrimiento de un hecho tan esperpéntico fue capaz de despertar una reacción en los medios de comunicación nacionales. En última instancia, lo que se ve todos los días rara vez se considera noticia.

Además, no hay que olvidar que estos son los mismos medios que abogaron *en contra* de la elección como alcalde de Luis Eduardo Garzón, el único candidato que había propuesto la lucha contra el hambre como una de las piedras angulares de su programa de gobierno. Asimismo, un aspecto curioso de este caso es que durante una visita a la zona en cuestión, un barrio de la localidad de Rafael Uribe Uribe, uno de los gestores sociales del distrito sugirió que la historia de Myriam Suárez era un invento o una equivocación. Según este testimonio, los niños encontrados por el periodista no eran de la señora entrevistada sino de una amiga que no los podía cuidar porque estaba trabajando. Además, había algo de comer en la casa. Infortunadamente, no se pudo verificar esta versión de los acontecimientos pero,

---

<sup>1</sup> *Citynoticias*, miércoles, 18 de agosto de 2004.

si fuera verdad, tendríamos que preguntarnos por las dinámicas profesionales y sociales que produjeron la noticia original.<sup>2</sup>

En todo caso, este acontecimiento mediático dramatizó de forma singular no sólo la crisis económica, política y social que vive Colombia, sino la manera como es representada por las grandes maquinarias mediáticas de la nación que desempeñan un papel muy importante en la (re)producción del imaginario social del país. Al respecto, lo cierto es que hasta que la imagen desesperada de Myriam Suárez explotó en los medios, los indicadores socioeconómicos de la crisis sólo aparecían de vez en cuando en los noticieros de televisión o en las páginas de *El Tiempo*, delirantes, confusos y casi irreales. Hay que reconocer que precisamente el énfasis de la alcaldía de Lucho Garzón en su programa de comedores comunitarios ha logrado que la pobreza y el hambre sigan considerándose temas que merecen ser representados en los medios. La política editorial de la prensa capitalina de escudriñar bajo lupa las iniciativas de una alcaldía que definitivamente no es “suya”, significa que no faltan las referencias al problema nutricional de los más necesitados. Para dar un ejemplo, el 5 de septiembre de 2005, el periódico *Hoy* dedicó sus primeras tres páginas a un análisis de las dietas de todos los estratos socioeconómicos en Colombia.

Lo que nadie niega, es que estamos viviendo una crisis socioeconómica de proporciones gigantescas que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero uno de los indicadores más impactantes de la profundización de la crisis ha sido el fortalecimiento de los marcadores de diferencia sociocultural que hacen de Colombia un estado donde rige un tipo de *apartheid* social, modelo resumido en el dicho popular: “juntos pero no revueltos”. De hecho, la polarización de una ciudad como Bogotá entre zonas de emergencia social y barrios de lujo sencillamente refleja la división del territorio nacional en un mapa de retazos, configurado por cascos urbanos más o menos seguros, comunas del miedo, zonas rojas, pueblos dominados por la inseguridad, resguardos indígenas paramilitarizados, comunidades negras destrozadas por el conflicto armado, vías seguras y otras inciertas, y carreteras recuperadas. Estas últimas generalmente incorporadas dentro de lo que el asesinado comediante Jaime Garzón solía llamar el “narcoparaterritorio”. Tales divisiones han llegado a ser crónicas, y su carácter sedimentado cuestiona el facilismo de ciertas visiones de mundo que ponen demasiado énfasis en flujos globales y procesos de desterritorialización.

Aun así, es indudable que gran parte de la crisis actual es producto de las formas de inserción del país en el sistema global. Entre ellas predomina el tema del narcotráfico y las medidas que supuestamente se toman en su contra, como el Plan Colombia, pero tampoco hay que olvidar que el país está viviendo los resultados de más de diez años de ortodoxia neoliberal, un proceso que está a punto de profundizarse aún más mediante la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Si la retórica es familiar, con su énfasis en la “reestructuración”, la “flexibilización”, la “competitividad”, y el recorte del gasto público (en todo menos lo militar),<sup>3</sup> también lo es el resultado: desempleo,

---

<sup>2</sup> Entrevista inédita con Julio César Guevara, gestor social de la Caja de Vivienda Popular, Bogotá, 17 de noviembre de 2004.

<sup>3</sup> Colombia es un caso curioso en este respecto, ya que su gasto público ha crecido enormemente debido a los fondos dedicados al presupuesto militar y a la maquinaria burocrática necesaria para administrarlo (Garay 40).

hambre, y una profundización del abismo que separa a una minoría acomodada de la mayoría pobre.

Uno de los puntos nodales donde se concentra la tensión entre lo local y lo global es la Constitución nacional, centro de una serie de recientes debates políticos. Con respecto a este documento fundacional, vale la pena recordar que proclama la igualdad dentro de la diversidad de todos los colombianos, medida que evidentemente fue concebida como una respuesta al sistema informal de *apartheid* sociocultural que tanto ha marcado la historia colombiana. El artículo 7 afirma que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, y concede ciertos derechos tanto a las diferentes etnias indígenas del país como a las comunidades negras de la costa pacífica. Aunque esta reivindicación de los derechos de unos grupos fuertemente delimitados no toma en cuenta el aspecto “racial” de la estratificación social del resto del país, ni la situación de indígenas y afrocolombianos fuera de sus tierras, marca por lo menos los inicios de una política de reconocimiento.<sup>4</sup> Además, la Carta propone un papel activo e intervencionista para el Estado, declarando en el artículo 366 que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado” y, por lo tanto, “el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra”. En tiempos más recientes, el énfasis constitucional en la igualdad y la tolerancia se ha visto plasmado en eslóganes tales como el de Antanas Mockus durante su segundo mandato como alcalde de Bogotá: “Para vivir todos del mismo lado”.

Asimismo, la constitución empieza con una invocación del “pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano”, que “sanciona y promulga” los artículos de la carta magna. De hecho, la invocación del “pueblo” como fuerza legitimadora del Estado busca representar el momento utópico donde, en términos de Ranajit Guha, “the nation comes to its own” (43). En este momento articulador el “pueblo” se refiere a todos los colombianos, no sólo a los sectores pobres. Además, a lo largo de la constitución hay un reconocimiento embrionario de la naturaleza múltiple, diversa, de este “pueblo”. No es sencillamente una entidad monolítica, un abstracto que justifica el ejercicio del poder. Es un intento, en palabras de Orlando Fals Borda, de “asimilar esta lección: que una nación (postmoderna) puede construirse, de verdad, cuando interioriza, reconoce y goza de la unidad en la diversidad de sus habitantes” (6).

Pero este momento utópico es de corta duración, y no logra ser más que un sueño plasmado en forma de promesa. En realidad, la táctica de sucesivos gobiernos y de las élites en general ha sido promover la idea de que tenemos que ser realistas, que toca reconocer y aceptar con fatalismo todo lo que no se puede controlar, por lo cual se entiende las exigencias del mercado global. Sugieren que no hay alternativa a las actuales políticas neoliberales. Y en este momento la diferencia entre las élites, o la “clase política”, y “el pueblo”, entendido de nuevo como clave para referirse a los sectores pobres, vuelve a aparecer. Este fatalismo interesado se ve claramente ejemplificado en el artículo de Alvira

---

<sup>4</sup>De hecho, el reconocimiento de la autonomía relativa de los resguardos indígenas y de las comunidades negras corre el riesgo de convertirlos, sin querer, en estructuras que se asemejan a los bantustanes en la Suráfrica racista, entidades territoriales que relegan a indígenas y afrocolombianos a “su lugar”.

cuando escribe que “pese a que el grueso de los recursos se volcó durante las pasadas administraciones a atender las poblaciones más vulnerables, el desempleo, la recesión económica, el desplazamiento y la caída de los ingresos, hizo que la brecha entre ricos y pobres se agigantara y que la pobreza golpeará sin compasión a las localidades más vulnerables” (2). No hay un análisis del contexto internacional, de modo que los cambios producidos por la lógica del sistema económico global, en conjunto con las decisiones concretas de sucesivos gobiernos colombianos, parecen más bien actos de alguna deidad malévola: arbitrarios, confusos, ininteligibles.

Ahora bien, este énfasis en lo irremediable no sólo de las divisiones sociales sino de una profundización de la brecha entre ricos y pobres tiene varias facetas. Es una táctica política que, por una parte, sugiere que las administraciones locales anteriores a la de Garzón invirtieron la mayor parte de sus recursos en lo social, lo cual no es cierto. Ni Lucho, con su énfasis en los programas sociales, puede pretender eso. Por otra, busca liberar al Estado de su responsabilidad constitucional. Lo que comparten los dos aspectos de esta estrategia es la meta de tapar la “obscenidad” del actual orden social que alcanzamos a vislumbrar en el caso de Myriam Suárez, esa obscenidad del elitismo, del racismo, y de la violencia que, en el análisis sugerente de Slavoj Žižek, se esconde detrás de la fachada democrática (28-29).<sup>5</sup> En la actualidad, tal obscenidad tiene varias facetas, entre ellas la aceptación en el campo económico del “sentido común” del neoliberalismo que significa la negación de la mayoría de los proyectos de emancipación, y una creciente aceptación en lo político de que para alcanzar los espejismos de la estabilidad y del desarrollo hay que exterminar al enemigo terrorista.

Dentro de este contexto, quiero retomar la idea del *apartheid* social que rige en Colombia. Un factor esencial en la legitimación y reproducción de este orden social es un sistema de representación que pone a cada cual en su lugar, creando un imaginario social en el que se juntan el elitismo y el racismo. Por lo tanto, en el presente trabajo quiero considerar unos ejemplos sobre cómo las maquinarias figurativas del país construyen las identidades que, en conjunto, conforman la categoría de “pueblo”, y las rearticulan ante la crisis actual. Estas representaciones buscan incorporar lo marginal y lo periférico para fijarlo como parte de un imaginario social en el cual la categoría de “pueblo” se encuentra conformada por “narcoparamilitares”, “narcoguerrilleros”, “traquetos”, “secuestradores”, “sicarios”, “desplazados”, “recicladores”, “hampones”, “prostitutas”, “desechables”, “parceros”, “pobres”, “negritos”, “indios” y, con cada vez mayor frecuencia, “terroristas”. Esta violencia simbólica, constitutiva del orden social, articula, regula y reproduce todas estas figuras salidas de la “*chusma*” colombiana, la multitud que históricamente ha amenazado con desbordar los límites de los regímenes de representación, negando asimismo la posibilidad de que se conviertan en verdaderos sujetos sociales e interlocutores políticos.

En lo que sigue, voy a enfocarme en la representación de los habitantes de los barrios vulnerables de las ciudades colombianas, sobre todo en lo que se refiere a la representación mediática de su relación con el Estado y con el resto de la sociedad colombiana. Mi punto de partida, por cierto arbitrario, es un artículo titulado “La séptima emergencia” que apareció en *El Tiempo*, fechado en febrero de 2004. El autor del texto, José Navia, quería llamar la

---

<sup>5</sup> En este caso, por supuesto, Žižek estaba hablando del thatcherismo.

atención sobre la ironía social que representa la yuxtaposición, en el barrio “in” Usaquén, de “personas con los suficientes ingresos para comprar un apartamento de 500 millones de pesos” y otras como Concepción Cruz, “una habitante del barrio Arauquita, en los cerros de Usaquén”, que viven en ranchos “de madera y zinc”. En otras palabras, la meta del texto era enfocar la brecha social que divide el país, representando uno de los extremos de la realidad social nacional y, de este modo, proporcionarnos una idea sobre quiénes son estos compatriotas, estos seres humanos que viven en la miseria. La manera como el periodista representa esta situación, sin embargo, es sumamente reveladora del imaginario social que una y otra vez se perpetúa en los reportajes de los medios colombianos.

En primer lugar, hay que analizar la construcción de la figura de Concepción Cruz, que sirve al periodista como eje de su reportaje. A lo largo del artículo, Navia se refiere a ella como “Conchita”, y su tono condescendiente subraya con elocuencia el abismo sociocultural que lo separa de su “informante”, al igual que tantos “patrones” que interpelan a sus “empleadas” con el diminutivo. Desde la perspectiva del periodista, lo que más caracteriza a Concepción es su ínfimo estatus social, y por lo tanto la utiliza para construir una imagen de pobreza y vulnerabilidad. Así que se nos informa que ella recicla “cartón, latas y otros desperdicios”, detalle que la ubica dentro de una tipología de la marginación social. Sabemos de inmediato de quién se trata: pertenece a esa casta de intocables que se ven empujando sus carritos con rodachines llenos de basura por las calles de la ciudad, los que viven literalmente de los desechos de los más afortunados. Y, como era de esperar –por lo menos desde la perspectiva del periodista–, es una persona ignorante, incapaz hasta de entender los términos de su propia desgracia. ¿Será que realmente le preguntó o sencillamente daba por sentado que doña Concepción “no tiene ni idea de qué es eso del ingreso per cápita”?

El artículo enfatiza las dificultades de su situación, contándonos que si bien su hijo mayor terminó el bachillerato –lo que en sí dice algo sobre el sacrificio y esfuerzo de sus padres– hoy “trabaja esporádicamente como albañil”. Y de ahí, la situación empeora. Por ejemplo, el hijo siguiente, Helver, de 17 años, “está recluido por cuenta del Distrito en un instituto para drogadictos”, mientras que una hija anónima de quince años, que “apenas terminó la primaria”, ya lleva un año viviendo con un muchacho que trabaja en la “rusa” y tiene una hija de diez meses. Los otros hijos “Camilo, Cindy, Wilmer y Tania” tienen zapatos pero no tienen uniforme ni sudadera y el menor de todos, Miguel Ángel, “vive rodeado de los juguetes que sus padres recogen de la basura”. Este uso de los nombres de algunos de los hijos de Concepción es una de las estrategias que utiliza el periodista para mostrar lo representativo de este caso, ya que en sí ayudan a identificar el estrato socioeconómico de la gente. Es decir, las brechas sociales se explicitan hasta en el uso de los nombres, mostrando que “ellos” son diferentes de “nosotros”.

A lo largo de su artículo el periodista se esfuerza por demostrar lo degradado del entorno, dándonos una lista indiscriminada de calamidades: “madres adolescentes, drogadicción, desnutrición crónica y enfermedades diarreicas, violencia sexual e intrafamiliar, peligro de deslizamientos masivos y surgimiento de pandillas, son algunos de los fantasmas que rondan las calles” (5). No vacila en agregar otros “casos escalofriantes”, como el de “una niña de once años que ejercía la prostitución con dos hombres”, sin olvidar el detalle que

“uno le pagaba dos mil pesos y el otro cinco mil”. Y para rematar, nota que en medio de todo esto rondan otros tipos de miedos: “Las autoridades están alertas”, sentencia, porque apareció un panfleto firmado por “Efraín Rivas”, “Alacrán” e “Indio”, supuestos jefes paramilitares”. Sin embargo, no hace ningún comentario sobre la posible relación entre violencia y control social. La amenaza de la “limpieza social” queda en el vacío, y el papel del Estado, que aquí se presenta como protector, jamás se problematiza.

Después de esta letanía de males, presenta lo que considera la parte menos deprimente del escenario:

Aun así, algunos habitantes se consideran afortunados. Buena parte de los barrios han sido legalizados, pavimentados y les están llegando los servicios públicos y el alimentador de TransMilenio;<sup>6</sup> la zona produce montones de material de reciclaje y hay suficientes carros para cuidar a cambio de unas monedas. También están cerca los cultivos de flores, labor apetecida por las mujeres a pesar de que en temporada salen de sus casas a las 4 de la mañana y regresan a la medianoche.

Esto, tal vez, es la parte más dicente de todo el artículo. “Ellos”, los habitantes de la zona, parecen tener necesidades y esperanzas más limitadas que “nosotros”, los lectores que compartimos la posición social del periodista. Se contentan con la legalización de sus barrios, la presencia de “material de reciclaje” (basura), y la posibilidad de cuidar carros “a cambio de unas monedas”. De nuevo, se entiende que el escritor es de los que tienen carro, de los que pagan a los pobres para que se lo cuiden. Pero lo más preocupante de todo esto es la idea de que estas oportunidades sean de alguna manera suficientes o aceptables. Figura un mundo del “pobre feliz” que se contenta con lo poco que “Dios le da”. Menciona el horario esclavizante de los cultivos de flores, notorios internacionalmente, pero no comenta ni el mal pago ni la falta de protección que sufren estas mujeres ante el uso masivo de pesticidas carcinógenas.

Al igual que Alvira, Navia minimiza la responsabilidad de las instituciones del Estado ante esta situación crítica. Aunque no lo dice directamente, sus comentarios aprueban el desempeño de las administraciones anteriores a la de Lucho Garzón, así que el Distrito es “una presencia notable” y “docenas de funcionarios y policías comunitarios sudan en estos cerros tratando de detener una avalancha social”.<sup>7</sup> Es decir, se entiende que hay buena voluntad por parte de las instituciones pero la situación sencillamente no tiene remedio, a pesar de sus esfuerzos. La posibilidad de que exista explotación, corrupción e injusticia, y que estos factores tengan algo que ver con la exclusión social, sencillamente no se contempla.

Es notable la relación vertical que existe en la imaginación del periodista entre la administración local y la población, pero no sólo se concibe la intervención social como algo impulsado por decisiones paternalistas, tomadas desde arriba e implementadas por trabajadores de buena fe, sino que se insinúa que las instancias del Estado representan una barrera contra la amenaza de la barbarie que reside en esta encarnación particular del “pueblo”. En este sentido, la referencia a la “avalancha social” es central, ya que figura el miedo de

---

<sup>6</sup>TransMilenio es el nombre del sistema de transporte masivo en Bogotá.

<sup>7</sup>Esta impresión también es errónea: uno de los mayores problemas que tiene el Distrito en este tipo de barrio es la falta de personal. Los gestores sociales de la Caja de Vivienda Social, por ejemplo, tienen que atender a las exigencias de más de cien barrios.

los estratos medios y altos ante la posibilidad de que la crisis llegue a tales proporciones y, además, que se vuelva incontrolable, dando lugar a una invasión de la “chusma”.

De hecho, el posible desbordamiento de las fronteras sociales, simbolizado por la tensión generada por la cercanía física de estratos que normalmente están separados por barreras mejor definidas, es el foco de interés del artículo. Termina con un comentario curioso sobre la historia de esta topología social:

Pero no es fácil. Estos barrios llevan casi medio siglo en las mismas condiciones. Los fundaron unos cuantos desplazados de la violencia de los años 50 y ahora sus hijos, nietos y biznietos [*sic*] siguen aferrados a los barrancos, sobreviviendo, como Conchita Cruz, su esposo y sus ocho hijos.

Es decir, no es fácil detener la “avalancha social”. Hay un sentimiento de resignación ante la posibilidad de una verdadera mejoría en la situación de este tipo de barrio, ya que sus habitantes parecen empecinados en seguir allí, “aferrados a los barrancos”. Esta actitud se ve reforzada por la ausencia de un análisis histórico. Hay una mínima referencia histórica cuando se nos dice que estos barrios fueron fundados por “desplazados de la violencia de los años 50”, pero esto sólo sirve para sugerir que la historia se repite. La relación entre las injusticias históricas, la miseria, y la desigualdad sigue siendo un enigma.

Lo más notable de este texto, tal vez, es que Concepción Cruz realmente no tiene voz. Apenas cinco palabras suyas aparecen citadas en el texto, en la referencia a su marido que “tomaba mucho y me pegaba”. Es decir, doña “Conchita” sólo interesa en la medida en que sirva de eje para llevar a cabo una representación de su barrio, que es a la vez tremendista, y una apología del papel del Estado. Claro, ella es una persona “ignorante” y las opiniones que importan en el artículo son las del periodista. Pero el paternalismo evidente en una perspectiva que la puede juzgar de esta manera también explica por qué los habitantes del barrio no aparecen jamás como interlocutores serios. Después de todo, hay algo de infantil en la representación de Concepción, ya que una persona incapaz de entender lo que le pasa apenas parece mayor de edad. En este sentido es tan diferente de nosotros que sus opiniones no son válidas. Y ahí está el meollo del asunto, ya que mientras el fatalismo del artículo sugiere que los pobres siempre estarán con “nosotros”, su manera de representarlos enfatiza constantemente que no son como “nosotros”.

Una representación mucho más extendida de este espacio social se encuentra en la película *Como el gato y el ratón*, dirigida por Rodrigo Triana, con guión de Jörg Hiller. Después de su estreno a finales del 2002, *Como el gato y el ratón* tuvo un paso efímero por los cines colombianos y ahora tiene una modesta acogida en tiendas de vídeo en diversas partes del país.<sup>8</sup> En el momento de su aparición se decía que era una película novedosa, entre otras razones porque se filmó en dos barrios vulnerables del sur de Bogotá (Mirador de la Estancia y Villamercedes), e incluía la participación de varios de los vecinos. Además, a diferencia de algunas producciones recientes, no se enfocaba en la narcoviolenencia. En esta comedia negra, que invierte de forma cínica la fórmula de *Romeo y Julieta*, no aparecen ni sicarios, ni pandillas juveniles.

<sup>8</sup> De hecho, aparece en la cadena Blockbuster en la sección de cine extranjero, una ironía que dice mucho sobre la falta de sensibilidad de esta transnacional.

En términos generales se podría decir que La Estrella es un “típico” barrio popular. Sin embargo, vale la pena preguntarnos en qué medida puede considerarse “típico”. Después de todo, la mayoría de los estratos medios colombianos hacen todo lo posible por evitar ir a estos lugares. Por consiguiente, la pantalla de cine representa una puerta por la que el espectador relativamente privilegiado puede entrar en un hábitat desconocido, o conocido únicamente mediante un imaginario tremendista que es constantemente alimentado y estructurado por los medios. Le permite observar todo lo que pasa desde una distancia segura, dándole después la impresión de haber podido vislumbrar la vida de los barrios marginales. Pero en la mayoría de los casos lo que realmente pasa es que la película va estructurando las percepciones de un espectador que no tiene una experiencia directa de los lugares que representa.

A diferencia del artículo de Navia, la película no se enfoca exclusivamente en la degradación del entorno, sino que evoca la vida en un barrio vulnerable mediante una serie de imágenes más neutrales. Las calles destapadas, las casas hechas “con las uñas” por los mismos vecinos, la gente que hace fila para recoger agua, las vistas panorámicas de la ciudad desde arriba, todos estos detalles ayudan a ubicar al espectador de clase media en este terreno poco familiar, haciéndole ver la ciudad literalmente desde otro ángulo. De hecho, la gran estrella de neón que sirve de motivo a lo largo de la película funciona para enfatizar este problema de perspectiva, ya que las grandes estrellas que iluminan la noche bogotana en la época navideña a menudo se encuentran en barrios marginales. Pero mientras las estrellas son visibles, los barrios, por lo general, siguen siendo *terra incognita*.

La otra diferencia notable entre el artículo y la película es que los personajes tienen que hablar por sí mismos. Desafortunadamente, el guionista y el director optaron por buscar el humor en personajes bidimensionales que representan una serie de tipos. Las dos familias protagónicas, por ejemplo, tienen cierto estatus en el barrio, ya que Cayetano Brochero es farmacéutico, mientras que Miguel Cristancho es dueño de una tiendita donde tiene una venta de changua.<sup>9</sup> Sus mujeres peleonas y chismosas se las dan de señoras importantes en el barrio. Giovanna, la hija de los Cristancho, es una buena estudiante, “tragada” de Edson, el hijo de los Brochero, un joven poco escrupuloso que se cree el galán del barrio. El trabajador comunitario que ha encauzado los esfuerzos de los habitantes del barrio por mejorar su nivel de vida se llama Kennedy (la elección del nombre es, desde luego, irónica), y según los clichés de la semiótica social colombiana, su cara “aindiada”, camiseta del Ché, y mochila arahuaca, son símbolos tanto de su clase como de sus actitudes de activista de izquierda. “Negro”, el indigente, es otra caricatura supuestamente humorística, más “llevado” que cualquiera de los otros vecinos, víctima de los prejuicios de los otros habitantes del barrio, que luchan por elevarse por encima del nivel de este ser degradado.

La reacción estereotipada de la clase media al entrar en este entorno es expresada por el único personaje de clase media, la “doctora” María Angélica, abogada que ayuda a la comunidad. Cuando Kennedy la lleva a la tienda de Miguel Cristancho para comer changua le dice “¿Cómo así, además me toca comer allá?”, un recelo clasista que se vuelve aun más evidente cuando está a punto de tomarse la sopa y pregunta “¿Y esto sí es limpio, Kennedy?” Lo notable es que incluso cuando estas escenas se burlan de estos prejuicios, a la vez los

---

<sup>9</sup>La changua es una sopa de papa con huevo.

reproducen, como es el caso cuando María Angélica resulta ser la infortunada que recibe el plato de changua con rata.

A pesar de las tensiones presentes en el barrio, la película empieza en un momento de triunfo y de unidad cuando los vecinos se juntan para ver llegar el alumbrado público después de una larga lucha. Los deseos de los habitantes de La Estrella de alcanzar la ciudadanía, integrándose en la formación hegemónica, se presentan de forma muy evidente en el guión. Por ejemplo, Pancha Brochero le dice a Consuelo Cristancho:

Usted sabe muy bien que para el gobierno nosotros no somos na'. Somos ahí una partida de desplazados, ni siquiera somos ciudadanos. Estamos destinados a morir en esta porquería de barrio. Sin agua, ni luz, ni teléfono. Sólo con un poco de tierra bajo los pies. Y con la esperanza estúpida de llegar a ser alguien en este país.

Pero las esperanzas suscitadas en la comunidad por su incorporación en la red de alumbrado público de la capital son resumidas en las siguientes palabras de Kennedy:

La alcaldía por fin nos reconoce como parte de esta ciudad. Ya tenemos respaldo. ¡Por fin tenemos estatus! Y es un estatus que nos hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. ¡Sí, somos pobres, pero esta es una comunidad con mucha verriquera! ¡Qué viva La Estrella!

Este es el momento utópico de la película, celebrado con “cumbia moderna” y “mariachi clásico contemporáneo”, referencias irónicas a estilos musicales que simbolizan los procesos de hibridación en los barrios marginales donde lo rural se encuentra con lo urbano. El aguardiente se pasa de mano a mano, y casi se alcanza a sentir el fuerte olor a “populacho” que impregna la rumba.

Los Brochero y los Cristancho están unidos en este primer momento, complacidos por las alabanzas de sus vecinos. Como dice Kennedy, eran ellos los que “hicieron las llamadas, las cartas, se fueron hasta los noticieros”. Pero con la llegada de la luz sobreviene el desastre, empezando con la piratería de la corriente eléctrica para el uso doméstico. Hasta este momento todo se había hecho de forma legal, sin referencia alguna a la politiquería –a la compra de votos, o a los intereses especiales representados por los líderes comunitarios– que tanta influencia ha tenido en estos procesos de legalización y mejoramiento de barrios. Kennedy, se opone al robo de la electricidad, pero Cayetano le dice:

A veces usted parece marciano, ¿no? Como si no supiéramos de aquí cuánto se demora en echarnos las vainas, viejo. No, yo lo que creo es que a veces el ciudadano tiene que hacer cosas por su cuenta, y ríase. [...] La luz está en el cable. Nos dieron papaya, partámosla y se acabó la joda.

Se olvida la vía legal hacia la incorporación en la comunidad nacional. En vez de eso se nos presenta el cliché absurdo del colombiano “avisgado”, que se aprovecha de los demás sin jamás dejarse engañar. Esta figura es una parte esencial de la visión hobbesiana de la sociedad colombiana que atraviesa la película, resumida en una serie de banales dichos populares tales como “el mundo es de los vivos”, o la ley de la papaya: “no hay que dar papaya, pero si te la dan, tienes que tomarla”.

La película enfatiza cada vez más este aspecto de los personajes. En medio de una borrachera Miguel Cristancho le dice a Cayetano “vivimos dignamente, al contrario de mucha gente tenemos un lote, una casita y no pagamos impuestos”, ante lo cual este último responde “Ni luz”. Entre risas, Miguel sigue en sus reflexiones:

¿Sabes una cosa compadre? Yo no cambiaría mi vida por la de ningún gomelito ricachón de esos que no sabe en qué gastarse la bendita plata. Yo tengo lo que necesito, mi casita, mi carrito, mi negocio, mi luz, mi vieja, mi compadre, y una hijita divina a la que adoro.

Miguel alude a la estratificación social pero ya no piensa en la solidaridad con una comunidad que tanto ha luchado por el reconocimiento. La solidaridad ha sido reemplazada por el individualismo que tanto marca a la clase media colombiana. Y cuando Kennedy va donde la abogada, la “doctora” María Angélica, ve que ella también está pirateando la corriente eléctrica, con la ayuda del “Negro”. Kennedy protesta (“ahorita nos estamos convirtiendo en unos hamponcitos”), y hasta piensa en la llegada de la policía (“¿qué pasa el día que llegue la policía y nos meta a todos en la cárcel?”). Pero ante la preocupación de Kennedy, María Angélica le responde: “Kennedy, por Dios, aquí no viene la policía. Esto es tierra de nadie”.

Según la moral conservadora de la película, el pecado original del robo de la luz conlleva la destrucción de todo lo que se había construido a nivel comunitario. Cuando Cayetano no mueve un cable que pasa por el patio de los Cristancho y Consuelo recibe el “corrientazo” se desata la pelea. Miguel le corta la luz a Cayetano durante un partido de fútbol; Cayetano mete una rata en la changua de Miguel; Consuelo arruina la fiesta de cumpleaños de Edson; los Cristancho matan el gato de los Brochero; los Brochero incendian la casa y el negocio de los Cristancho, y para rematar, Edson seduce a Giovanna para deshonrar a la familia Cristancho. En medio de todo esto la comunidad se divide en dos bandas armadas que finalmente se enfrentan en la cancha de fútbol, con machetes, palos, y barras de hierro. María Angélica sugiere que llamen a la policía, pero la respuesta histérica de Kennedy es contundente: “No, doctora, aquí la policía no sube, usted tenía razón, esto es tierra de nadie”.

No obstante, el activista comunitario intenta calmar los ánimos: “Estamos destruyendo todo lo que construimos durante años. ¡Suelten esas putas armas ya! ¡Por favor, estamos cansados, vámonos para las casas!” Pero sus palabras no surten ningún efecto, y la gente se abalanza los unos sobre los otros. Al final interviene el destino porque en medio de la tormenta cae la torre de la luz y electrocuta a todos los que están en la cancha. Giovanna, ingenua representante de la esperanza, queda de rodillas en medio de más de treinta cadáveres, entre ellos los de sus padres. La película finaliza con una sección de créditos donde aparece la estrella en la parte de arriba de la pantalla y el escudo de Colombia abajo.

Por una parte, desde luego, el uso de uno de los símbolos patrios sugiere que se lea la película como una alegoría nacional. Y, efectivamente, en el momento culminante de la pelea en la cancha de fútbol, Kennedy dice: “¿Así vamos a arreglar las cosas en La Estrella, a lo colombiano, a las patadas?” En una entrevista el director acepta la validez de tal lectura, pretendiendo que

no hay discusión, triunfo o derrota que no termine en sangre. Parece ser la idiosincrasia del colombiano. Nos entendemos muy bien a punta de bala y machete. Ese es mi dolor y por eso fui tan descarnado en la cinta.<sup>10</sup>

Crear una alegoría nacional en la cual se echa la “culpa” de la violencia y del desorden a la “idiosincrasia nacional” es una estrategia sumamente conservadora, ya que una vez más tapa los verdaderos factores: la injusticia, la falta de trabajo, la corrupción de las maquinarias partidistas, la ineficiencia y falta de interés del Estado, el mercado global. De hecho, al final de la película se enfatiza la culpabilidad de la comunidad, ya que el empleado de la empresa de la luz aparece con las palabras: “Eh señor, les traemos los contadores de la luz”. Las instituciones cumplen, y Triana se despide con la sugerencia irónica de que si estas “bestias” hubieran esperado, si hubieran confiado en la vía legal en vez de piratear la luz, todo habría acabado bien.

En últimas, vemos un proyecto comunitario destrozado por las rencillas, por el machismo, el orgullo, la ignorancia, y la lucha por el estatus. Y ya que no aparece ningún representante de los estratos altos colombianos, es inevitable llegar a la conclusión de que todas estas características son del *populacho*, de la *chusma*. La cruda agresión verbal de las discusiones y la violencia de las peleas sugieren que esta es una cultura esencialmente violenta, capaz de ir de la cortesía exagerada a los cócteles molotov, la violencia sexual, y las armas en un abrir y cerrar de ojos. Pero tal vez peor que todo esto es la incapacidad de la comunidad de juntarse para conseguir una meta común. Se tacha a estos representantes del “pueblo” de salvajes incontrolables, incapaces de mantener su organización ante las peleas personales, y aunque se les conceda algún nivel de representatividad, otra vez lo más evidente es que son diferentes de “nosotros”.

Aunque el papel de las instituciones en *Como el gato y el ratón* es representado bajo una luz generalmente positiva, la idea de que estos espacios son efectivamente “tierra de nadie” tiene implicaciones inquietantes para el Estado. La falta de ley equivale a una falta de control, pero históricamente los barrios marginados de las ciudades poco le han interesado a la clase política, aparte del momento de buscar votos con promesas y politiquería.<sup>11</sup> Pero la aparición de otras fuerzas, como el narcotráfico y, sobre todo, las guerrillas, desafía al Estado, amenazando con convertir estos lugares en su fortín. En estas circunstancias el Estado se ha visto obligado a ejercer su autoridad para no dejar que las zonas urbanas vulnerables se conviertan en cuarteles donde estas fuerzas paralelas puedan construir un “paraestado” y empezar a influir en la verdadera nación, es decir, en los barrios acomodados de las ciudades, donde viven los verdaderos ciudadanos.

Las dinámicas de la economía política que inspiran este tipo de acciones son muy evidentes. Sin embargo, desde la perspectiva de un discurso político oficial que no sólo invoca al “pueblo” como legitimación de la democracia sino que proclama la esencial unidad nacional, las realidades del *apartheid* social que rigen en Colombia presentan un problema, ya que reconocerlas implicaría tener que enfrentarse con una serie de contradicciones insuperables. Un ejemplo de las tensiones que surgen del intento subsiguiente de “representar

---

<sup>10</sup> Rodrigo Triana, entrevistado en *El País* de Cali, 3 de noviembre de 2002.

<sup>11</sup> Se decía que Ciudad Bolívar en Bogotá era un lugar donde “la única ley es la ley de la gravedad”.

sin representar” apareció hacia el final del 2002, con la invasión de la comuna 13 en Medellín por una fuerza compuesta por unidades del ejército y de la policía, y por agentes de la Fiscalía y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Las “comunidades” en Medellín ocupan un lugar emblemático en el imaginario social colombiano. Son barrios conformados por edificios destaralados de ladrillo rojo, y otros aun más precarios, que suben de forma caótica por las faldas de las montañas que encierran la ciudad en el valle de Aburrá.<sup>12</sup> A finales de los 80, durante la “narcoguerra” entre el cartel de Medellín y el Estado, llegaron a ser notorias como caldo de cultivo de los sicarios que llevaban a cabo los asesinatos y atentados ordenados por los capos de la droga. También han llegado a ocupar un lugar importante en el imaginario social de la nación como resultado de novelas exitosas –*La virgen de los sicarios* y *Rosario Tijeras*, obras en que narradores burgueses proyectan sus fantasías sobre estos lugares desconocidos, convirtiéndolos en fetiches exóticos–. Por lo tanto, aparecen como emblemas del mal y de la degradación, símbolos de la corrupción que corroe el alma nacional. Como tales, ocupan un lugar extremadamente ambiguo en el imaginario burgués, ya que son a la vez una parte esencial de la nación y definitivamente ajenos. Este deslizamiento figurativo entre inclusión y exclusión, entre identidad y diferencia, caracteriza la mayoría de las representaciones mediáticas del encuentro entre el Estado y sus “ciudadanos marginales”.

Durante la última década, los barrios de la comuna 13 llegaron a ser una base de los milicianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Con la extensión del paramilitarismo como modelo de organización social por gran parte del territorio nacional, se convirtieron en campo de batalla entre los milicianos de la guerrilla y los “paras” que buscaban desalojarlos. El 16 de octubre de 2002, sólo dos meses después de la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se lanzó la Operación Orión, con el objetivo de “retomar” el control de la comuna 13. Las órdenes presidenciales eran tajantes: “no retirarse hasta no obtener el control total del sector” (“Batalla campal en Medellín”). Decenas de periodistas, colombianos y extranjeros, presenciaron por lo menos parte del operativo.

Aunque en los días que precedieron la invasión los periódicos contenían artículos sobre la gravedad de la situación en Medellín, con tiroteos que estaban acabando con la tranquilidad hasta de los barrios estrato cuatro y cinco, el primer día de reportaje pleno fue el jueves, 17 de octubre.<sup>13</sup> El enfoque general se centraba en la llegada del “conflicto armado” a las ciudades, y el nivel contundente de fuerza ejercida por el Estado, que incluía el uso de helicópteros. El viernes, 18 de octubre, salió un artículo en *El Tiempo* titulado “Así despertó la zona de los combates en Medellín” (López). El texto, bastante corto, es dominado por dos fotos. En la primera hay un grupo de cuatro militares delante de una casa. Uno de ellos, afrocolombiano, rifle en mano, está dando una patada a la puerta para

---

<sup>12</sup> En realidad, todo Medellín está dividido en “comunidades” y, en la zona rural, “corregimientos”. Pero el término “comuna” ha llegado a referirse sobre todo a los barrios vulnerables de la ciudad.

<sup>13</sup> La estratificación social de las ciudades colombianas se lee en parte por su división en seis estratos. En principio las tarifas más caras de los servicios públicos en los estratos altos subvencionan a los estratos más bajos.

forzarla. En la segunda, se ve otro militar afrocolombiano en el fondo, y dos hombres con camisa esqueleto y pantaloneta en primer plano, un poco desenfocados. Están de espaldas a la cámara, dejando ver que tienen las manos amarradas. No hay nada que los marque como milicianos, lo cual en sí no es sorprendente, ya que la naturaleza del miliciano es precisamente camuflarse entre la población civil. Pero este problema de identificación y de identidad resalta el problema de que cualquier habitante de los barrios de dominio guerrillero se había convertido automáticamente en sospechoso, hecho subrayado por uno de los titulares del jueves, “No dispáren, no somos milicianos”. De hecho, una de las tácticas habituales del ejército colombiano en estos casos es retener a toda la población de una zona hasta que haya sido “procesada”, en lo que se llama una “operación candado”. Es una práctica lógica desde la perspectiva militar, y ha sido empleada en innumerables conflictos irregulares y guerras de “baja intensidad”. Pero aunque ayuda a los militares a sentirse más tranquilos, tiene la desventaja de confundir su identidad a los ojos de los que supuestamente están liberando. ¿Son de hecho libertadores, o son más bien agresores que dudan de todos los que los rodean? Si uno tiene que cargar con el pecado original de ser habitante de uno de los barrios periféricos de la nación, es muy difícil estar seguro al respecto.

Esta ambigüedad no se evidencia en el texto que sigue a las fotos, que se enfoca más bien en el drama del momento, pero se ve claramente en los días siguientes. Sin embargo, el tono del artículo del sábado, 19 de octubre, es casi triunfal. Al hablar ya con confianza de la “recuperación de la Comuna 13 de Medellín por parte de la Fuerza Pública” (González), se enfatiza la acogida positiva de los uniformados por la gente:

La mayoría de la gente expresa tranquilidad por la presencia de la Fuerza Pública. “Ojalá se queden un buen rato”, dicen habitantes.

“Lo importante es que permanezcan por un buen tiempo. No queremos quedar a merced de los delincuentes”, afirmó un ama de casa. (González)

Y aunque aparece el dato inquietante de que “la cifra de heridos sube a 34, en su mayoría población civil”, se enfatiza la restauración del orden y de la libertad. La foto que acompaña el artículo subraya el mensaje básico, mostrando a un soldado al fondo mientras que dos mujeres de la comuna van pasando en el primer plano, una de ellas con una sonrisa a flor de labios.

Pero el 20 de octubre, vuelve la incertidumbre. La edición dominical de *El Tiempo* dedicó varias páginas a los acontecimientos en Medellín. Las ideas de recuperación y de liberación seguían formando uno de los ejes temáticos de los textos, pero la complejidad de la actitud de los habitantes de la zona ante la invasión empezaba a leerse entre líneas. Por ejemplo, uno de los artículos nos informa que

La gente de los barrios involucrados en el conflicto sintió alivio cuando la Fuerza Pública tomó el control. Pero el miedo por los abusos de los actores armados no la abandona. (Salgado)

Otro trozo de texto, incrustado en el artículo principal, proclama que “la aparición de la Fuerza Pública no alcanza a borrar el miedo de los rostros de la gente” (Salgado). Por una parte, sugiere el temor de la gente “honrada”, parte de la nación, de ser abandonada de nuevo por el Estado. “Ya era hora de que vinieran”, dice un habitante de la comuna, mientras que otro

describe el innegable horror de la vida entre fuegos cruzados, repitiendo la amenaza que podría venir de cualquiera de los bandos: “si lo vemos con los otros lo matamos” (Salgado). Pero por otra parte se empieza a vislumbrar el miedo que inspira el brazo armado del Estado:

En el barrio uno está a la merced de los milicianos que le queman hasta la ropa si trata de irse, de los paramilitares que asesinan con la disculpa de que todos somos auxiliares de la guerrilla y de la Policía y del Ejército que disparan a sabiendas de que nos están utilizando como escudos. (Salgado)

“Parte de la comunidad entiende que el Ejército está entrando a hacer el bien. Pero hay otra gente que no se siente protegida por él. ¿Qué va a pasar con estos barrios? La gente tiene mucho miedo”, dice un hombre al que las autoridades golpearon el jueves cuando trató de bajar a un herido desde Salado a la Unidad Intermedia de Salud de San Javier. (Salgado)

Poco después el reportero anuncia que este informante tenía “un brazo inmovilizado debido a las patadas de los policías”, sin agregar comentario alguno, como si este hecho no mereciera mayor investigación y análisis.

En todo esto, se empieza a entever la ambigüedad de los sentimientos de los habitantes de la comuna 13. Pero no hay un análisis de estos sentimientos. No se investiga por qué, a pesar de sentir un alivio real ante el final del constante fuego cruzado entre milicianos y “paras”, la gente no ve a la Fuerza Pública como protectora. El editorial del domingo 20 de octubre adopta una posición analítica, pero en vez de interrogar esta ambigüedad central nos presenta otra. Primero, se reconoce que “la Comuna 13 no es muy diferente de otras zonas pobres de Medellín, que son la mayoría, como en toda Colombia” (“Editorial”). Además, se acepta que las circunstancias de exclusión y de miseria son un factor, ya que “el caldo de cultivo de los violentos que se instalaron en el lugar se refleja en cifras como el 60 por ciento de desempleo y el 60 por ciento de desnutrición infantil”. Asimismo, se sugiere que lo que pasó allí “no es más que el estallido de una bomba de tiempo”, creada en parte por “el hacinamiento de poblaciones desplazadas y la subsistencia de una cultura violenta, otrora encarnada por los ejércitos de sicarios del narcotráfico”.

Este último comentario, sin embargo, introduce otro tipo de ambigüedad, ya que insinúa que una “cultura violenta” también tiene la culpa. Y si esta cultura era “encarnada” en el pasado por el sicariato, es en sí algo más intangible, pero a la vez más esencial, algo por lo cual los habitantes de las comunas deben responsabilizarse. En palabras de Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín en el momento de la toma de la comuna 13, “la pobreza no es una licencia para matar” (Gutiérrez 6). Siguiendo esta corriente, en otro artículo aparece un comentario crítico de Beatriz White, directora de la Alianza de Fundaciones Empresariales (Entretodos), ONG que hace presencia en la zona: “estamos convencidos de que la pobreza y la marginalidad no son solamente las causas de los conflictos violentos. Son factores asociados a la violencia” (Restrepo). La proposición se invierte fácilmente: la violencia es un factor asociado a la pobreza y la marginalidad.

Ahora bien, no se puede negar que los barrios pobres son los lugares más violentos de las ciudades, pero políticamente es esencial saber si se piensa que esta violencia se debe en su mayor parte a las circunstancias o si se considera que una predisposición hacia la violencia es un rasgo esencial de la gente que vive en tales lugares. Esta última visión es básicamente

la que se propone *Rosario Tijeras* –otra vez no sin ambigüedad– al representar a los pobres como violentos por naturaleza. Para Rosario, sicaria salida de las comunas nororientales, la “narcoguerra” de los 80 representa “la detonación de los instintos” (Franco 79). Como si esto fuera poco, se nos recuerda que “sus genes arrastran con una raza de hidalgos e hijueputas, que a punto de machete le abrieron camino a la vida” (Franco 39).

Si es así se enturbian bastante las cosas ya que la naturaleza violenta de la población justifica el uso de la fuerza para disciplinarla. Y ésta, efectivamente, era la situación que encontramos Gregory Lobo y yo en mayo del 2004 cuando llevamos a cabo una serie de entrevistas en la comuna 13.<sup>14</sup> Encontramos una zona bajo el control paramilitar cuyos habitantes repetían sin cesar que “hemos pasado del control de un grupo armado a otro”. Y aunque el miedo al fuego cruzado entre milicianos y paramilitares había desaparecido, la imagen del barrio que emergió en las entrevistas era de un lugar donde el control social era ejercido mediante la amenaza constante de la violencia. Además, los temores y ambigüedades que apenas se entrevén en los artículos analizados arriba todavía estaban presentes, como se ve claramente en las siguientes citas:

Porejemplo, cuando estaba aquí en esas guerras, ahí sí fue donde el gobierno metió la mano bien, porque fue donde sacó a toda esa gente de por acá, que era la que estaba haciendo daño. Hay amenazas, hay esto, hay lo otro. Entonces, [...] lo amenazan, tenés que hacer esto, no podés hacer aquello, porque me perjudicás a mí o perjudicás a aquella organización. Ya la gente como... no cree en el país, no cree en Colombia, que un fulano se lanzó de candidato a la presidencia, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que los anteriores... la mayoría de la gente ya como que no le bota tiempo a salir a votar, ya no vota, le da lo mismo, ¿ah, que hay democracia?, pero ¿de qué nos sirve, si de todas formas van a hacer lo que les de la gana con nosotros cuando estén allá arriba? Entonces, ¿para qué votamos?<sup>15</sup>

Pero estas ya son representaciones, hechas por la gente misma sobre su situación, que nos llevan más allá de la construcción de los acontecimientos elaborada por los medios nacionales.

Quiero terminar con unos comentarios generales. En todo lo anterior se ve que en el momento de representar, hasta con cierta simpatía, la miseria y sufrimiento de los marginados, los medios de comunicación nacionales enfatizan que “ellos” no son como “nosotros”. La miseria y la degradación son categorías que forman parte de un “imaginario del miedo” estrechamente relacionado con las inquietudes de los estratos altos y medios ante la posibilidad de una verdadera “avalancha social”. Por lo tanto, aunque se sugiera que hay que hacer algo para “los pobres”, persiste una ambigüedad sobre si son, en el fondo, salvables. Si son por naturaleza díscolos, violentos y caóticos la única respuesta posible es protegerse, disciplinándolos a la fuerza. Es decir, detrás del “cariño” paternalista hacia los marginados hay una suposición de autoridad que se arroga el derecho de decidir cuándo hay que ser generoso y cuándo hay que castigar.

<sup>14</sup> Estas entrevistas se llevaron a cabo como parte de un proyecto sobre nación, estado y democracia financiado por la Universidad de los Andes y Colciencias.

<sup>15</sup> Entrevistas llevadas a cabo con residentes del barrio El Salado, comuna 13, Medellín, 28 de mayo de 2004.

Asimismo, la relación entre el “pueblo” y la nación en el discurso mediático es sobre todo ambigua. Las esporádicas apelaciones a lo “popular” como encarnación de lo nacional se ven minadas por las dudas, siempre implícitas, sobre la viabilidad de la comunidad nacional. Éstas, a su vez, sirven para justificar las políticas actuales y contrarrestar los aspectos más peligrosamente progresistas de la constitución del 91. Las circunstancias económicas que hacen “inevitable” el empobrecimiento de grandes sectores de la población también hacen “inevitable” la necesidad de mantener a “esa gente” en su lugar. Y para hacerlo se puede recurrir no solamente a la fuerza sino también a la archiconocida topología de la exclusión.

La falta de interés en hegemonizar las barriadas vulnerables de la nación mediante las instituciones –la relativa ausencia del Estado colombiano– tiene su paralelo en la ausencia de un intento discursivo de hegemonizar a sus habitantes. Claro que como instituciones, tanto el cine colombiano como *El Tiempo* son filtros que excluyen a los marginados, ya que se dirigen hacia los estratos medios y altos de la sociedad colombiana. Pero aun así es impactante la indiferencia que demuestran hacia la posibilidad de interpelar directamente al “pueblo”. Las identidades mezquinas que ofrecen, impuestas desde arriba, jamás podrían ser otra cosa que mendrugos concedidos a los subalternos por sus superiores. No engañan a nadie, y nos recuerdan que para los “pobres” en Colombia está la violencia en todas sus encarnaciones, empezando por el hambre, el desempleo y la amenaza del paramilitarismo. El deseo de persuadir y de legitimarse, también evidente en estos textos, se dirige hacia otros. Es decir, la práctica articuladora encarnada en los ejemplos que hemos visto refuerza la cohesión de los estratos medios y altos. Al definir al “pueblo” como radicalmente ajeno a “nosotros”, ayuda no sólo a reproducir sino a legitimar la tremenda desigualdad que caracteriza a Colombia hoy día.

Lo cual nos remite de nuevo al reconocimiento constitucional de la diversidad. Mientras no haya un desafío sistemático a estos regímenes de representación, el énfasis formal en lo social y la promoción del multiculturalismo siempre serán deshechos por discursos informales en los cuales predominan el elitismo y el racismo. Las posibilidades de que las mayorías participen de forma significativa en la democracia colombiana se ven muy limitadas si no tienen voz, y si la minoría acomodada no las reconoce como interlocutores serios. Es decir, si el único diálogo posible en la Colombia actual es entre un sordo y un mudo, las perspectivas para una paz con justicia social en Colombia son muy tenues. En últimas, tenemos que preguntarnos si el multiculturalismo que se imagina para Colombia es de reconocimiento de los diversos grupos étnicos, y no de redistribución. Como nos recuerda Nancy Fraser (93) el uno sin el otro no tiene mayor sentido, ni mayor impacto político. En Bogotá, Lucho Garzón ha sido acusado por algunos de asistencialismo, pero en su intento no sólo de hacer visibles a los “pobres”, al gestionar desde los barrios periféricos de la ciudad, sino de llevar a cabo una mínima redistribución mediante los comedores comunitarios y la oferta de educación gratuita a los niños de estratos uno y dos, hay por lo menos los principios de un cambio de actitud, de un reconocimiento de que se pueden hacer las cosas de otra forma. Sin diálogo, sin reconocimiento, y sin redistribución, eslóganes como “Para vivir todos del mismo lado” seguirán siendo llamados vacíos al “populacho” a civilizarse. Y por mucho que los medios se escandalicen por casos como el de Myriam Suárez, mientras que no se reconozca tanto la verdadera ciudadanía del “pueblo” como su derecho de representarse en toda su heterogénea multiplicidad, la búsqueda de la legitimidad democrática en Colombia no será más que un espejismo.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alvira, Juan Diego. “El drama de una familia que se alimenta con papel y panela genera ola de solidaridad”. *El Tiempo* (20 agosto 2004): 1-2.
- Anónimo. “Guerra en las calles de Medellín”. *El Tiempo* (17 octubre 2002): 1-1.
- Anónimo. “Batalla campal en Medellín”. *El Tiempo* (17 octubre 2002): 1-2.
- Anónimo. “No disparen, no somos milicianos”. *El Tiempo* (17 octubre 2002): 1-3.
- Editorial. “La batalla de las comunas”. *El Tiempo* (18 octubre 2002): 1-14.
- Fals Borda, Orlando. *Ante la crisis del país: ideas-acción para el cambio*. Bogotá: El Áncora Editores, 2003.
- Franco, Jorge. *Rosario Tijeras*. Bogotá: Biblioteca El Tiempo, 2003.
- Fraser, Nancy. “From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a ‘Post-Socialist’ Age”. *New Left Review* 212 (1995): 68-93.
- Garay, Luis Jorge. “Políticas públicas y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”. *El embrujo autoritario*. Bogotá: Ediciones Antropos, 2003.
- González, Raúl Eduardo. “Lento retorno de la calma”. *El Tiempo* (19 octubre 2002): 1-3.
- Guha, Ranajit. “On Some Aspects of the Historiography of Colonial India”. *Selected Subaltern Studies*. Ranajit Guha y Gayatri Spivak, eds. Oxford: Oxford UP, 1988.
- López, Néstor Alonso. “Así despertó la zona de los combates en Medellín”. *El Tiempo* (18 octubre 2002): 1-3.
- Navia, José. “La séptima emergencia”. *El Tiempo* (22 febrero 2004): 2-3.
- Pérez Gutiérrez, Luis. Entrevista, “Yo no frené la paz: Alcalde de Medellín”. *El Tiempo* (20 octubre 2002): 1, 5-6.
- Restrepo, Orlando. “Guerra en las puertas de las casas”. *El Tiempo* (20 octubre 2002): 1-4.
- Salgado R., Carlos. “El temor no se va de la comuna 13”. *El Tiempo* (20 octubre 2002): 1-6.
- Vallejo, Fernando. *La virgen de los sicarios*. Bogotá: Alfaguara, 1998.
- Žižek, Slavoj. “Multiculturalism, or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism”. *New Left Review* 226 (1997): 75-89.